



UPDATES PHILIPPINES

Publicación del Frente Democrático Nacional de Filipinas

Amsterdamsestraatweg 50, 3513AG Utrecht, Los Países Bajos
T: : +31 30 2310431 | E: updates.philippines@ndfp.org | W: updates.ndfp.org

2021 Numero 2

Edición Español

1 de febrero 2021

EDITORIAL

La vacuna del Covid-19 “a la Duterte”

En el momento en que se escribe este artículo, al menos 10.290 filipinos han muerto a causa del coronavirus. Hasta la semana pasada, al menos 25.260 seguían enfermos y cada día enferman unos 1.300 más. Filipinas es uno de los países de Asia con más casos de coronavirus. Millones de personas han perdido su medio de vida. Y, sin embargo, el gobierno de Rodrigo Duterte se encuentra miserablemente a la zaga en el trabajo por vacunar al pueblo filipino contra el virus.

Siempre tan amante de sus generales mercenarios, Duterte nombró al general Carlito Gálvez en marzo de 2020 como jefe de su grupo de trabajo Covid-19 y añadió el título de “zar de las vacunas” en octubre. ¿Y qué han hecho hasta ahora, aparte de un montón de comunicados de prensa inflados?

En lugar de realizar pruebas masivas y el consiguiente rastreo de contactos, los filipinos tienen que pagar para hacerse la prueba. A finales de diciembre, «algunos funcionarios del gabinete» y el Grupo de Seguridad Presidencial recibieron vacunas contra el coronavirus, en violación de las leyes sobre ensayos clínicos y autorización de uso de emergencia. Más claro que el agua, Duterte y sus funcionarios se priorizan a sí mismos por encima del personal sanitario de primera línea y de la población vulnerable.

Duterte y Gálvez también han estado haciendo campaña a gritos para comprar la CoronaVac de Sinovac, incluso antes de que la farmacéutica china haya solicitado cualquier ensayo clínico o uso de emergencia en el país. Al defenderse contra las acusaciones de corrupción, Duterte prácticamente admitió que, además del general Gálvez, el secretario de Finanzas Domínguez y el propio Duterte compartirán las comisiones por la venta de medicamentos. Mientras que decenas de millones de vacunas ya se han distribuido gratuitamente en varios países del mundo, Duterte y sus compinches babean por las comisiones de venta, ¡al diablo con la salud del pueblo!

La vacuna Covid-19 «a la Duterte» es traicionera, corrupta, antipopular y represiva. El pueblo filipino debe luchar cada vez más decididamente por la distribución gratuita y segura de las vacunas Covid-19 al personal sanitario, a la población más vulnerable y, finalmente, a la población en general. **UP**



Windel Bolinget, Presidente de la Cordillera People's Alliance. Foto: bangkokpost.

La Policía Nacional ordena el asesinato de un líder indígena de la Cordillera

El 20 de enero, el director regional de la Policía Nacional de Filipinas para la Cordillera, el general de brigada Rwin Pagkalinawan, emitió una orden de “disparar a matar” contra el líder indígena de la Cordillera, Windel Bolinget, en caso de que “se resista a ser detenido”. Bolinget, presidente de la Alianza Popular de la Cordillera, que representa a los pueblos indígenas del norte de Filipinas, se enfrenta a cargos de asesinato en Davao del Norte, en la isla sureña de Mindanao.

Sarah Dekdeken, secretaria general de la CPA, denunció la detención y las órdenes de disparar a matar como un intento del gobierno de Duterte de silenciar a Bolinget y a la CPA

para que no reivindicquen los derechos de los pueblos indígenas y de los pueblos filipinos contra la agresión al desarrollo. “Bolinget no cometió ningún asesinato ni daño físico contra ningún individuo. Nunca fue a Davao del Norte ni visitó ninguna parte de Mindanao en 2018”, dijo.

La CPA pidió que se abandonara el caso inventado contra su líder.

“La orden del general Pagkalinawan es un pretexto para la ejecución extrajudicial de Bolinget... Está claro que, desde el principio, no tenían ningún plan para dejar que Bolinget fuera juzgado por lo que se le acusa y darle la oportunidad de defenderse en un tribunal”, dijo la CPA.

[continúa página siguiente...]

[... continuación]

Se sabe que el personal de la Policía Nacional ha matado a sospechosos desarmados que “se resistían a ser detenidos”. El CDH había informado de que las fuerzas policiales de Duterte reutilizan las armas de fuego confiscadas como “prueba” de que las personas a las que matan se resistieron al arresto.

El Sr. Bolinget, miembro de los grupos indígenas kankana-ey y bontok de la provincia de Mountain, ha sido acusado por los funcionarios de seguridad de Duterte de reclutar a miembros para el Nuevo Ejército del Pueblo. Se le ha incluido en una lista de objetivos militares, junto con otros líderes de la CPA. Se han distribuido carteles de “Se busca” con su foto en varios lugares de la provincia de Mountain.

Un tribunal de la ciudad de Tagum, Davao del Norte, emitió recientemente una orden de detención contra Bolinget y varias personas más presuntamente por el asesinato de Garito Tiklonay Malibato el 21 de marzo de 2018 en Tagum. Tras la orden de detención, la Policía Nacional de la provincia de Kalinga, en el norte de Filipinas, anunció el 15 de enero una recompensa de 100.000 pesos filipinos (2.000 dólares) por cualquier información sobre el paradero de Bolinget. El 20 de enero, el general Pagkalinawan dio la orden de disparar a matar.

El 21 de enero, Bolinget se entregó voluntariamente a la Oficina Nacional de Investigación para su custodia y protección, a fin de poder impugnar las acusaciones contra él ante un tribunal competente. **UP**



*El líder de Tumandok Roy Giganto asesinado por agentes de seguridad de Duterte.
Foto: panaytoday.net*

Líderes indígenas tumandok asesinados en ataques antes del amanecer

El 30 de diciembre de 2020, nueve líderes comunitarios pertenecientes a los indígenas tumandok de la isla de Panay fueron asesinados en sus hogares en un ataque perpetrado antes del amanecer por tropas armadas combinadas de las Fuerzas Armadas de Filipinas y la Policía Nacional Filipina. Entre los asesinados se encontraban los líderes de TUMANDUK Eliseo Gayas Jr. y Roy Giganto.

Según la familia y los vecinos, Gayas Jr. fue abatido tras recibir la orden de salir de su casa, mientras que Giganto murió de un disparo mientras dormía en presencia de su

familia. Todas las víctimas estaban desarmadas y les dispararon a sangre fría.

Ese mismo día, 16 líderes de Tumandok y residentes de la comunidad fueron detenidos en ataques simultáneos en otros pueblos de la isla. Se les acusó falsamente de posesión ilegal de armas de fuego, munición y explosivos.

Tras las atrocidades, 500 residentes evacuaron sus comunidades, buscando refugio en centros de evacuación en Tapaz y Calinog. Mientras tanto, las tropas armadas de Duterte han establecido puestos de control en la provincia de Capiz. El alcalde de Tapaz, Roberto Palomar, prohibió a los periodistas y a los no residentes entrar en la ciudad.

Las operaciones terroristas en Calinog, Iloilo, y Tapaz, Capiz, fueron llevadas a cabo por elementos combinados del 12º Batallón de Infantería de las AFP y la Región 6 de la PNP. Afirman que los nueve “murieron en un tiroteo”. El coronel Orlando Edralin, subcomandante de la 301ª Brigada de Infantería de las AFP, afirmó que los muertos y detenidos eran miembros del Partido Comunista de Filipinas y del Nuevo Ejército del Pueblo.

La policía tenía órdenes de registro emitidas por dos jueces de Manila, a más de 600 km. de distancia. Ambos jueces emitieron un total de 28 órdenes de registro.

Condenando las atrocidades y la ruptura del estado de derecho, el Movimiento contra la Tiranía declaró el 31 de diciembre que “las órdenes de registro emitidas por los tribunales se convirtieron en penas de muerte para los campesinos de la etnia Tumandok que luchan contra la discriminación, el acaparamiento de tierras y las expansiones desarrollistas”.

Los Tumandok se han resistido a la construcción de la Megapista de Jalaur y del Proyecto de Desarrollo Integrado de la Cuenca del Río Panay. Los líderes de la comunidad se negaron a firmar la resolución de “Consentimiento libre, previo e informado” para la ejecución de los proyectos en sus tierras ancestrales. Al menos 17.000 tumandoks se verán desplazados por el proyecto Jalaur Megadam, que se espera que cause inundaciones y otros problemas a al menos 1,2 millones de residentes a lo largo de la cuenca del río Jalaur.

El proyecto de la cuenca del río Panay, por su parte, afectará al menos a 19 pueblos. Se prevé que su cuenca inundará al menos 21.100 hectáreas de tierras, afectando a las tierras ancestrales de los Tumandok.

[continúa página siguiente...]

[... continuación]

El Partido Comunista de Filipinas pidió al Nuevo Ejército del Pueblo que atendiera el clamor del pueblo de Tumandok para que se haga justicia. “Las brutales ofensivas tienen como objetivo romper la unidad de los Tumandok contra el proyecto de la mega presa de Jalaur, que inundará sus tierras ancestrales”, dijo el CPP. **UP**



La fiscal de la CPI Fatou Bensouda.
Foto: icc-cpi.int

Pueblo filipino, la Comunidad internacional recibe el informe ICC contra el gobierno de Duterte

Los defensores de los derechos humanos en las Filipinas y en todo el mundo han recibido el informe de la Fiscal del Tribunal Penal Internacional (ICC), Fatou Bensouda, quien ha encontrado “fundamentos raonables para creer” que el gobierno de Rodrigo Duterte pudiese estar cometiendo crímenes contra la humanidad.

Las conclusiones están contenidas en el Reporte anual del 14 de diciembre del Sra. Bensouda, donde se ven razonables fundamentos de “asesinato, tortura y imposición de serias lesiones físicas y graves daños mentales...que han estado siendo cometidos desde el 1 de junio del 2016 y el 16 de marzo del 2019, en conexión con la guerra contra las drogas, la campaña liderada por el gobierno de Duterte.

Las alianzas filipinas por los derechos Humanos, Karapatan y Rise Up for Life and Rights, han elogiado el informe del ICC. Rise Up ha dicho que “los oficiales de estado y las fuerzas policiales fueron descarados y confiaban en que gozarían de la impunidad de sus crímenes”.

El abogado Edre Olalia, Presidente del National Union of People’s Lawyers (NUPL), ha sentenciado que las conclusiones del informe tendrán “un considerable desarrollo que producirá repercusiones de gran alcance”. El presidente-moderador de NUPL, el abogado Neri Colmenare, por su parte, ha añadido que Duterte debería de ser arrestado en un futuro cercano por su papel en los asesinatos extrajudiciales y la institución de la cultura de la impunidad ente las fuerzas de seguridad”.

Mientras tanto, la Comunidad Internacional de Investigación en la Violación de los derechos humanos en Filipinas (INVESTIGATE PH), compuesta por luminarias legales de decenas de países, ha anunciado que liderará una investigación dirigida por personas independientes sobre la terrible situación en Filipinas, señalando que “la comunidad mundial tiene la responsabilidad de hablar y buscar la verdad”.

Duterte y sus oficiales han desestimado el informe de Bensouda y han alegado que el ICC no tiene jurisdicción para llevar adelante este caso porqué el régimen se retiró del ICC y del Estatuto de Roma en marzo del 2019.

Sin embargo, en su informe, la Sra. Bensouda ha confirmado que el ICC conserva jurisdicción sobre los crímenes ocurridos entre el 1 de noviembre del 2011 hasta el 16 de marzo del 2019 en las Filipinas. Se señala en el mismo informe que “Además, la investigación y el enjuiciamiento de los crímenes y delitos cometidos hasta el 16 de marzo del 2019 inclusive, no están sujetas a ningún limite de tiempo”. **UP**



UPDATES PHILIPPINES

Publicación del Frente Democrático Nacional de Filipinas

Amsterdamschestraatweg 50, 3513AG Utrecht, Los Países Bajos

T: +31 30 2310431 | E: updates.philippines@ndfp.org | W: updates.ndfp.org